

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia

México, Febrero 18 de 1873.—Vista la competencia iniciada por el Juzgado de Distrito de Veracruz, á la 2ª Sala de esta Corte Suprema de Justicia para no conocer de la demanda entablada por el Presbítero D. Miguel Domingo Reyes, sobre nulidad de la adjudicación de la casa número 1397, ubicada en Jalapa: las actuaciones practicadas por el Juzgado y por la 2ª Sala: el informe remitido por la misma: lo pedido ante esta 1ª Sala por el Sr. Fiscal cuyo pedimento se refiere á que se devuelvan los autos al juez de Distrito de Veracruz, diciéndole que no siendo del resorte de los Tribunales federales el conocimiento de la demanda puesta por el Presbítero D. Miguel Domingo Reyes, contra el adjudicatario de la casa número 1397 de la ciudad de Jalapa, D. Agustín Cordero, obre en el presente caso con arreglo á derecho y visto lo demás que convino: Se decreta de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal por sus propios legales fundamentos.

Devuélvanse sus actuaciones á la 2ª Sala de esta Corte Suprema de Justicia y las suyas al juez de Distrito de Jalapa con copia de esta sentencia y del pedimento Fiscal para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de esta Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*M. Zavala.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Marzo 4 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas, por D. Carlos Thiele, contra el Alcalde 2º Pedro Vivez, que le impuso una pena correccional de ocho dias de prision, por faltas que cometió el quejoso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El extranjero D. Carlos Thiele, con fecha 3 de Setiembre próximo anterior, dirige á este Juzgado un ocurso de amparo que, bien calificado, no es mas que una queja infundada contra las autoridades de Comitán, CC. Moisés Rojas, Pedro Vivez y Vicente García, con especialidad cuando se refiere al último, que ningún participio ha tenido en su cuestion, en el que los acusa de haber violado su domicilio, su casa asaltada y saqueada, y él puesto en la cárcel y destinado á los trabajos públicos; concretándose á pedir en su parte resolutive que el espresado Vivez sea perseguido criminalmente como instigador y principal gefe de estos crímenes.

Como tal exposicion es una mezcla incomprensible de detalles, en la que pide de todo y en nada se fija, el Juzgado mandó que se le oyera y dijera cuál de las tres fracciones del art. 1º de la ley general de 20 de Enero de 1869, servia de fundamento á su queja; cuál ó cuáles de las garantías individuales juzgaba violadas; y contra qué autoridad se dirigia. El quejoso, en la notificación que se le hizo con fecha 11 del mismo mes, manifestó estar violadas en él todas las garantías individuales que otorga la Constitucion, y que el autor de estas infracciones era el C. Alcalde 2º Pedro Vivez, por lo que lo acusaba formalmente; haciendo extensiva esta misma acusacion en la providencia de fecha 13, contra los jueces Moisés Rojas y Vicente García, pidiendo amparo á efecto de que sean juzgados criminalmente por tratamientos bárbaros, inhumanos, etc., etc.

De todas las garantías constitucionales que el promovente juzga violadas en su persona, la única que pudiera creerse atacada es la que le otorga el art. 19, pues dice en su escrito, que despues de cuatro dias de estar preso en la cárcel, no se le ha comunicado ni fundado auto que motive su prision. Pero para esto hay que atender, que en el informe pedido al C. Alcalde Vivez, manifiesta: que el quejoso fué preso y destinado á ocho dias de trabajos públicos, por faltas á su autoridad, resistiéndose á la entrega de una sirviente que se encontraba en su poder; resistencia que está comprobada por la declaracion de varios testigos, y revelada y consignada en el escrito mismo del quejoso, cuando entre otras frases dice: "yo no me desconozco el derecho de entregar á nadie en contra de su voluntad, que yo no soy un esbirro, es que me indica la ley que me obliga, que yo tiene la costumbre de obedecer á las leyes, pero cuando me son significadas por autoridades y en forma legal, y no por un mozo;" y el Sr. Thiele ha confesado reiteradas veces, que el C. Vivez es el Alcalde y por tanto autoridad constituida legalmente, y que su orden le fué comunicada de una manera tambien legal, pues en el párrafo 2º de su queja dice: "que el 31 de Agosto á las cinco de la tarde, le fué entregado por un mozo del Juzgado el escrito siguiente (que no copia) firmado por Vivez, juez 2º local.

Ahora bien: si contra lo prevenido en el art. 4º de la ley R. de amparo, se estima fundada la peticion del quejoso en la infraccion del 19 de la Constitucion Federal, ya se ha visto que dicho Alcalde Vivez, obraba en la órbita de sus atribuciones, haciendo efectiva una providencia emanada de su autoridad, en la que de ninguna manera deberia injerirse la autoridad Federal, si no es salvando la línea que por las leyes del Es-

tado les está trazada á las del fuero comun. Y menos deberia aquella tomar participio para esclarecer y castigar los demas puntos de su acusacion, toda vez que, á ser ciertos, constituyen solamente un motivo de responsabilidad, que deberia exigirse por las autoridades superiores de los acusados, usando de los recursos que las leyes han establecido para tales casos.

La queja del Sr. Thiele no se concretó á solo el Alcalde 2º Vivez, sino que la estendió contra el C. juez de 1ª instancia propietario, Vicente García, y accidental Moisés Rojas, y por cuyo motivo el Alcalde 1º constitucional, tambien les pidió informe, de lo que solo aparece digno de notarse, que el Sr. García ni estaba en funciones cuando estas ocurrencias, ni en Comitán, sino en su finca, pues disfrutaba de licencia, como así lo asegura, y aunque esto no se encuentra probado, no aparece en todo el curso del expediente que alguna providencia haya sido dictada por él, y ademas, se evidencia por el auto de 19 del mismo Setiembre, que se hallaba en funciones de juez de 1ª instancia el Alcalde 1º propietario, C. Moisés Rojas, siendo esta falta de verdad en el quejoso una calumnia que habla muy alto en su contra, y engendra á la vez, un motivo justo y legal para dudar de todo lo mas que asevera en la complicada acusacion.

Por los fundamentos expresados, esta Promotoría no vacila para pedir á su digno Juzgado, que siendo improcedente la queja de D. Carlos Thiele, se declare sin lugar el amparo que solicita, por creerlo así de justicia.

San Cristóbal Las Casas, Octubre 21 de 1872.—(Firmado.)—*Carlos Ballinas.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Chiapas.—San Cristóbal Las Casas, Noviembre 11 de 1872.—Vistos estos autos promovidos por D. Carlos Thiele, del vecindario de la ciudad de Comitán, cabecera del Departamento del mismo nombre, espresando que al haber sido mandado aprehender por el Alcalde 2º, O. Pedro Vivez, fué violado su domicilio, su persona molestada, su casa tomada por asalto y saqueada; que ha sido destinado á trabajos públicos, no se le ha formado juicio, no se le ha escuchado en su defensa; que se le ha sentenciado sin haberlo visto, y que probadas estas acusaciones, el O. Pedro Vivez, sea perseguido criminalmente como instigador, jefe y ejecutor de tales crímenes. Visto que, aunque el quejoso presentó un largo y difuso escrito, no fijó de una manera clara y perceptible su objeto, esponiendo que pedia amparo y concluyendo con acusar formalmente al citado Alcalde 2º; en cuya virtud, y atento á las condiciones escepcionales en que el propio quejoso decía hallarse, se mandó para mejor caracterizar sus pretensiones, que espresase cuál de las tres fracciones del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, servía de fundamento á su queja; cuál ó cuáles de las garantías constitucionales estimaba violadas, y contra qué autoridad, determinándola espresamente, promovía el recurso de amparo; lo cual verificado espuso: (fojas 3 vuelta, y 4 cara,) que ni una sola de las garantías individuales había sido respetada en su persona, y que las autoridades contra quienes pedia amparo, á efecto de que fuesen juzgadas criminalmente por tratamientos bárbaros ó inhumanos, ilegales y anticonstitucionales, atacando con intencion criminal su vida privada y su salud, son los CC. Pedro Vivez, Alcalde 2º, Moisés Rojas, juez de 1ª instancia en funciones por

ministerio de la ley y Vicente García, juez de 1ª instancia en receso, en uso de licencia. Vistos los informes del caso y los documentos de justificación que se acompañan; lo pedido por el C. Promotor fiscal; el auto de citación para definitiva; lo espuesto por el demandante en el acto de su notificación, y cuanto mas ver convino. Considerando: que aunque el quejoso ha hecho uso en sus distintas manifestaciones, de algunos conceptos por los cuales pudiera creerse que ha intentado el recurso de amparo, no aparece ser así en términos de estricto y riguroso derecho, siendo clara, espresa y manifiesta su voluntad de acusar, como formalmente acusa, para que sean procesados criminalmente, á los jueces contra quienes se querella; lo que mas fácilmente se comprende, si se tiene presente, que no ha indicado si quiera, no obstante habérsele prevenido, cuál de las tres fracciones del art 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, sirve de fundamento á su queja, y haber espresado que ni una sola de las garantías constitucionales ha sido respetada en su persona; faltando así al precepto legal que prescribe designar la garantía violada, acaso por el interés único de dar mas fuerza y vigor á los motivos de su queja, contra los jueces acusados; cosa cierta de ser así, si se atiende al espíritu dominante de sus pretensiones, y al interés no disimulado de hacer comprender en su acusación al juez de 1ª instancia en receso, O. Vicente García, que, por lo que de autos consta, ningún participio ha tenido en los hechos, materia de las pretensiones del reclamante; resultando en el último análisis, que siendo su objeto, como evidentemente se ve, acusar á los referidos jueces, ni el conocimiento de tal acusación es de la competencia de este Juzgado, ni puede decirse por lo mismo, procedente dicho juicio de amparo. Considerando:

que aun en el supuesto de que no fuera clara y manifiesta su intencion de intentar una acusacion sino un juicio de amparo, y que por lo tanto debiera entenderse interpuesto éste, tampoco seria de estimarse procedente, habiendo la autoridad informante demostrado, que procedia contra el quejoso en uso de sus facultades y conforme á la ley que las detalla; mayormente que no se ha tratado de instruirle un proceso en forma, sino de corregirlo correccionalmente por sus actos de inobediencia, y sus faltas de respeto hácia la autoridad; siendo de notarse ademas, que habiendo sido condenado á ocho dias de detencion ó arresto, debe entenderse ya libre, y por consiguiente sin objeto de recurso de amparo, que, como se ha evidenciado, carece de razon de ser, supuesta la intencion demostrada del querellante. Considerando: que si bien éste al notificársele el auto de citacion para definitiva, apeló de él para ante la Corte Suprema de Justicia, dando por principal fundamento, que no fué admitido á dar pruebas de los puntos de su acusacion; tal apelacion es inadmisibile; 1º: por tratarse de un simple trámite; 2º: por no ser un auto interlocutorio que pudiera traer gravámen irreparable, y 3º: por ser desconocido é inusitado ese recurso en juicios de la naturaleza del presente; siendo de advertir, que si se omitió recibirse éste á prueba, fué en consideracion, á que si tal procedimiento pudiera conducir á justificar las acusaciones del quejoso, no conduciría á justificar la legal procedencia del amparo, toda vez que no era éste sino aquellas, el punto objetivo de sus pretensiones, y respecto de las cuales ha debido y debe conceptuarse extraño este Juzgado. Considerando: finalmente, que está demostrado que el recurso de amparo es improcedente, y que si el quejoso tiene motivos para demandar

alguna responsabilidad contra los jueces Pedro Vivez, Moisés Rojas y Vicente García, debe hacerlo por los medios establecidos en el derecho comun: con presencia de lo espuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que no ha lugar, por improcedente, al recurso de amparo, y que si la parte que parécia haberlo intentado, tiene acciones del órden criminal que deducir, ocurra adonde corresponda.

Hágase saber y dése cuenta á la Corte Suprema de Justicia, con copia certificada del pedimento fiscal anterior y de esta resolucíon, para que se publique en el *Semanario Judicial*.

Así lo proveyó, mandó y firmó el C. Lic. Juan José Ramirez, juez de Distrito del Estado, ante el infrascrito escribano del despacho, que dá fé.—(Firmados.—*Juan J. Ramirez*.—*J. Crisóstomo Lara*.)

Son copias que certifico. San Cristóbal Las Ocasas, Noviembre 11 de 1872, —*J. Crisóstomo Lara*.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas, por D. Carlos Thiele, contra las providencias del Alcalde 2º Pedro Vivez, que le impuso una pena correccional de ocho dias de prision, por faltas á su autoridad, haciendo extensiva su demanda contra los CC. Moisés Rojas, juez de 1ª instancia, y Vicente García, juez de 1ª instancia en receso, formulando una acusacion criminal, por haber mandado la fuerza armada que lo condujera á la prision y haberle saqueado su casa; alegando, que estos hechos importan una violacion expresa de las garantías todas que á este respecto otorga el Pacto

Fundamental de la República. Vistas las constancias de autos; y considerando: que por el único dicho del quejoso y naturaleza de este asunto, solamente intervino la autoridad que dictó la providencia, y fué el Alcalde 2º Pedro Vizez, sin que puedan considerarse los demás funcionarios, por no fijarse por Thiele, cuáles sean los hechos ó providencias de estos, que sirvieron de base para entablar el recurso. Considerando: que la autoridad contra quien se solicita el amparo, obró en la órbita de sus atribuciones al imponer la pena correccional de ocho días de prision al peticionario, por las faltas cometidas contra el Juzgado, su providencia no importa violacion alguna de garantías, por cuyos fundamentos se decreta: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al peticionario, contra la órden de prision correccional de ocho días, dictada por el Alcalde 2º de Comitán.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de donde proceden, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 22 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, por José Lucas, contra el C. Gefe político del Distrito de Toluca, que lo consignó al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal, dice: que el C. José Lucas ha seguido un juicio de amparo contra la autoridad política de este Distrito por violacion de garantías, pues se ha quejado de que la espresada autoridad lo destinó al contingente para cubrir las bajas del ejército.

El C. Gefe político, al producir el informe de la ley, no oscurece el hecho, pero declina la responsabilidad manifestando, que conforme á las disposiciones del gobierno del Estado que tiene recibidas para la recluta del contingente, la hace con los vagos y ladrones rateros, y que siendo José Lucas uno de esos, segun los datos que obtuvo, por esa causa lo consignó al servicio de las armas.

El Juzgado del digno cargo de vd. en otros juicios idénticos por la causa que ha motivado el presente, ha concedido el amparo declarando violadas las garantías del art. 5º de la Constitucion general, y en aquellos, el que responde le ha presentado la cuestion bajo el punto de vista que le ha parecido conforme á la ley.

Tiene la creencia el que habla, de que el supremo decreto de 28 de Mayo de 1869 debe de considerase vigente, y como regla única á que deben sujetarse los gobiernos de los Estados para cubrir las bajas del ejército, pues de otra manera no darian á la Federacion ni un solo reemplazo.

El Gobierno del Estado de México para pagar al Supremo de la Union el contingente que le corresponde, no debe de servirse de sus disposiciones particulares para conseguir los reemplazos, sino que debe de hacer uso de los medios es-